

XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires, 2009.

El conflicto colombiano. La construcción institucional de un discurso que desplaza la memoria de la violencia.

Adriana González Perdomo.

Cita:

Adriana González Perdomo (2009). *El conflicto colombiano. La construcción institucional de un discurso que desplaza la memoria de la violencia*. XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-062/1935>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

El conflicto colombiano

La construcción institucional de un discurso que desplaza la memoria de la violencia

Adriana González Perdomo¹

Las ideas que me permito exponer aquí han sido producto de dos esfuerzos investigativos. El primero alrededor de la reconstrucción discursiva de las negociaciones con los movimientos insurgentes colombianos durante el período comprendido entre 1982 y 2002, y, el segundo alrededor de los componentes éticos, políticos y técnicos del discurso de la Seguridad Democrática en el actual mandato presidencial como modelo de relación con los actores armados ilegales en Colombia. Bajo esta perspectiva, el propósito de la ponencia es el de señalar algunos interrogantes que se cruzaron a propósito de puntos convergentes de las investigaciones señaladas y, por supuesto, sortear algunas interpretaciones sobre la relación entre semiótica y política en primer lugar; la narrativa oficial y la consolidación de una especie de sistema binario de oposiciones políticas, en segundo lugar.

Parto de señalar que en Colombia hay un pasado que tiende a ser amenazado por una especie de disolución, durante los últimos siete años se ha reivindicado una forma de reconstruir la memoria que no reconstruye la historia para no ser repetida, así “lo que el pasado deja son huellas, en las ruinas y

¹ Profesora y Coordinadora del Grupo de Investigación Violencia y Paz de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás – Sede Bogotá (Colombia), Socióloga de la Universidad del Valle, Candidata a Magíster en Investigación Social Interdisciplinar de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Dirección electrónica adrigonzalezperdomo@yahoo.es

marcas materiales, en las huellas mnésicas del sistema neurológico humano, en la dinámica psíquica de las personas, en el mundo simbólico. Pero esas huellas, en sí mismas, no constituyen ‘memoria’ a menos que sean evocadas y ubicadas en un marco que les de sentido” (Jelin, 2002:35). Lo político y la política en el país no posibilitan las condiciones para que el pasado tenga un sentido.

Semiótica y Política

Leonor Arfuch ha señalado que *semiótica y política* como significantes “están intrínsecamente ligados, desde las huellas textuales de los paradigmas fundadores (Peirce, Voloshinov/Bajtin, Lotman) a los usos diversos de su posteridad. Más allá de la tendencia a ‘especializar’ la semiótica según sus objetos, a identificarla con una alta formalización, a aislar sus propios términos constituyentes, la semiótica permite justamente una articulación interpretativa, valorativa y crítica del horizonte de la actualidad, de teorías, temas y problemas que involucran, transversalmente, las diversas esferas de la vida social” (2008:94).

El mundo de los signos atraviesa el mundo de lo político, se complementan y se instituyen como ámbitos en que los sujetos configuran sus propios marcos valorativos o sus esquemas de interpretación del mundo que *experian*. Siguiendo de nuevo a Arfuch “no hay modo de aprehensión directa de las ‘cosas’ y los acontecimientos por fuera de la dimensión simbólica, de los discursos, estrategias y soportes a través de los cuales la puesta en forma se realiza como puesta en sentido” (Ibid.:96). En otros términos, la forma en que se aprehende el mundo no es una forma ingenua, está precedida por la historia individual y la historia colectiva; por los campos de interacción en donde se produce dicha aprehensión.

Señalar lo anterior implica también un acercamiento a la construcción de la política como una de las construcciones simbólicas de los sujetos en el mundo de lo social, al respecto, Chantal Mouffe, quien a mi juicio cuenta con una lucidez fascinante al controvertir con los teóricos de la pospolítica en la actualidad, concibe la política “como el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de la conflictividad social derivada de lo político” (2007:16), en donde lo político se define como la dimensión del antagonismo, elemento constitutivo de las sociedades humanas (Ibid.).

Ahora bien, se transforma en emblemático el caso colombiano para pensar teórica y políticamente la relación entre una forma de organizar el mundo y los signos construidos socialmente mediante los cuales se da tal organización. Mi supuesto es la siguiente: *Nunca con tanta fuerza se había dado en la historia*

política del país un fenómeno como el uribismo a través del cual se transforman sustancialmente las dimensiones de lo político y la política.

Colombia a partir de 2002 va a experimentar profundas transformaciones estructurales en los modos de comprensión de lo político que afectarán las prácticas y las instituciones mediante las que se organiza *la experiencia de la conflictividad social, la experiencia de lo social y la experiencia de lo sujetos*. En enero de 2002, en ese entonces candidato presidencial, Álvaro Uribe Vélez sólo alcanzaba el 7% de intención de voto de acuerdo al censo electoral del país, no obstante, el golpe de opinión propinado por el Estado en virtud *a los afectos no correspondidos* entre la voluntad de diálogo del Gobierno de Andrés Pastrana y la voluntad de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, funcionó para Uribe Vélez, como la catapulta ideal, para lanzar la promesa que le ha permitido ilusionarse con la perpetuación de su poder y, jugar a su favor las fichas del tablero que amenazan una situación en la que podría verse en *jaque*.

Un recurso discursivo absolutamente incuestionable en el intento por rescatar un país agotado, desangrado por la violencia; un país inmediatista cuya cultura política le obliga a construir explicaciones monocausales de la violencia que ha surcado a Colombia. Así llegó a la presidencia con un triunfo electoral sin precedentes en el país, el candidato que se oponía a las negociaciones con el movimiento insurgente y quien afirmaba que derrotaría militarmente las FARC-EP en su primer año de gobierno, a través de una concepción de seguridad militar conducente a garantizar la democracia.

Impactó por supuesto. Sigue impactando a través de fabulosos golpes de opinión que lo han llevado a ser considerado como uno de los presidentes que logra con inteligencia poner al servicio de sus intereses los registros (prensa escrita, radio, televisión) a través de los cuales se inscribe y circula un lenguaje político que va configurando la narrativa oficial, su propia narrativa.

El Gobierno, durante estos siete años de mandato, ha transformado las concepciones de lo político desdibujando y descalificando simbólicamente el pensamiento crítico, el antagonismo, el conflicto, a través de argumentos de confrontación negativa. El uribismo es una nueva especie de socialización política en el país y Uribe Vélez se endilgó tal responsabilidad recreada permanentemente en una narrativa con visos personalistas en la que se reivindica la laboriosidad en un país que no da tregua – *trabajar, trabajar y trabajar* –; el centralismo aparente en la toma de decisiones sobre temas expuestos en los consejos comunitarios – *los consejos comunitarios son una estrategia mediática del Gobierno en donde el protagonismo de Alvaro Uribe Vélez estriba en su personalidad carismática, en su imagen de padre que regaña a los ministros, a gobernadores y alcaldes, a secretarios de despacho y directivos de entidades descentralizadas, en el acto de*

entregar a los asistentes su número de celular privado para que le informen personalmente sobre la ejecución de las decisiones, entre otros hechos con una carga altamente simbólica que se dan cada sábado –.

Dentro de la narrativa del Presidente encontramos una serie de recursos discursivos apoyados por iconos que constituyen una imagen de la realidad al sustituir la realidad misma; una imagen de la realidad fortalecida a partir de una sociedad controlada por los medios de comunicación y la información que éstos construyen. Un análisis del discurso y de representaciones sociales en la prensa escrita y en los espacios informativos televisivos daría cuenta de la manera en que la información es transmitida contribuyendo a la construcción de un imaginario colectivo que está privilegiando formas de relación que podrían sintetizarse en “*no hay mal que por bien no venga*”, “*que la Virgen Santísima nos ilumine*”, “*los bandoleros (que luego serían los terroristas) no quieren que el país salga adelante*”, “*el presidente es valiente porque reconoce sus equivocaciones y pide disculpas públicas*”.

Para una democracia, sobre todo la que se precia de ser la más antigua de América Latina, es muy peligroso transitar por los senderos en los que se construye la política en el país, transitamos hacia una personalización de la política en la figura del Presidente, olvidando de esta forma, el carácter pluralista, consensual, deliberativo de la democracia; olvidando el espíritu de la Constitución de 1991 que poco a poco ha ido quebrantándose.

La personalización de la política transita también hacia un escenario en el que se leen los argumentos de contigüidad en los fenómenos: *El Estado es Uribe, Uribe es el Estado*. Si no hay lugar para la confluencia en el Estado, si no hay lugar a la dimensión adversarial, es imposible no pensar que una figura, una persona, está resignificando la democracia. Si traemos la metáfora de la pospolítica como metáfora interpretativa del caso colombiano, teniendo en cuenta por supuesto el contexto regional y mundial, bien podría entenderse que lo político no se define hoy en día entre la derecha y la izquierda, si no que se define desde lo moral, desde la distinción del bien y del mal (Véase Mouffe, 2007). El país hoy se debate cada vez más en debates alrededor de las figuras sobre lo bueno y lo malo, sobre un nosotros y un ellos definidos moralmente; que en los debates alrededor del proyecto democrático como la expresión de la conflictividad social.

Narrativa oficial y sistema binario de oposiciones

El país a partir del año 2002 está experimentando un nuevo proceso de socialización política es mi segundo supuesto que se basa en una narrativa que se define el universo moral del bien y del mal, “de quienes están conmigo y quienes están contra mi”. De acuerdo a Bruner es a través del lenguaje y de la narrativa que los sujetos materializan su

identidad, una identidad construida en el momento en que se comparten experiencias y percepciones de la vida y el mundo con los otros (2006:47-75). Varios elementos están presentes en este supuesto, pero me refiero a uno de ellos: Uribe Vélez rompió la tradición de reconocimiento político que los movimientos insurgentes habían gozado desde 1982 cuando se instaurara un modelo de relación con éstos. Indudablemente, la experiencia de los diálogos del Caguán llevó a que se cristalizara una estrategia distinta por parte del Estado gracias también al apoyo del Plan Colombia.

La estrategia post-Caguán, iniciada en Febrero de 2002 por Andrés Pastrana y continuada por Álvaro Uribe Vélez, se ha sostenido durante siete años a través de una mayor movilidad de Brigadas y una inteligencia militar más sofisticada, a través del éxito en golpes militares directamente a sus cuadros y, particularmente, a través de la definición del terrorismo como una arma política que posibilita evidenciar acciones terroristas y acciones delincuenciales como el secuestro y la extorsión.

Es innegable que la lucha armada dentro de un proyecto democrático no tiene lugar, es innegable también que los colombianos levantan y – debemos levantar con mayor fuerza – sus voces – nuestras voces – de rechazo ante cada una de las acciones de los actores armados ilegales que van en contravía de la construcción de un país bajo una lógica democrática; sin embargo, el nuevo proceso de socialización política implica nuevas experiencias subjetivas y nuevas percepciones que encuentran una forma de organizar el mundo en la oposición del bien y del mal.

La política como una expresión racional se ha desfigurado dentro de este nuevo proceso de socialización, se ha definido a partir de lo moral. El reciente escándalo de las interceptaciones del DAS – Departamento Administrativo de Seguridad – permite dar cuenta de los alcances del Gobierno – aunque de este escándalo el Presidente sale ileso – en la concepción que se tiene sobre los elementos que pueden convertirse en una amenaza para la seguridad del país. Son objeto de sospecha aquellos que son críticos del Gobierno y particularmente de la Política de Seguridad Democrática. La narrativa oficial se articula bajo la lógica de amigo/enemigo, una lógica no de reconocimiento político de antagonistas como potencial edificador, si no una lógica de criminalización absoluta, una lógica binaria de oposiciones.

Con la implementación de la Política de Seguridad Democrática se redefinieron las coordenadas de la relación con los movimientos armados ilegales, particularmente, con los movimientos insurgentes, cuya consecuencia más inmediata ha sido la de invisibilizar al conflicto armado reduciéndolo a una ofensiva regional inevitable como parte de la ofensiva mundial en contra del terrorismo, una ofensiva local que

equipara los universos semánticos por línea nuevamente de contigüidad de los fenómenos entre seguridad y democracia.

A manera de ilustración. El concepto de Seguridad Democrática hace parte de los cambios paradigmáticos que en materia de seguridad se han dado en el continente desde la doctrina de Seguridad Nacional hasta las doctrinas de Seguridad Humana y Seguridad Democrática. Volviendo al punto, la doctrina de Seguridad Democrática, como doctrina, tuvo su origen en la firma en Centroamérica del Tratado de Marco de Seguridad Democrática, el cual “surge en el contexto de un proceso político regional marcado de manera particular por los conflictos políticomilitares nacionales y regionales que Centroamérica atravesó en las últimas décadas. De hecho, es el corolario de un proceso que se inicia con el procedimiento de Esquipulas para alcanzar la Paz Firme y Duradera en Centroamérica, y se prolonga en el proceso de integración regional que continúa hasta el día de hoy” (Arévalo, 2002:32). No me detengo en esto, porque implicaría traer dos aspectos que rebasan el carácter mismo de mi presentación, el primero, el espíritu del Tratado Marco de Seguridad Democrática y, el impacto paradigmático del 11 de Septiembre y la crisis de Irak en la región.

No es posible pasar por alto el carácter social del conflicto armado que ha implicado fundamentalmente el control territorial y los procesos de formación de fronteras en el país, originándose allí una doble complejidad en términos de las condiciones que potencian el conflicto, dada la inequidad no resuelta en muchas zonas de control insurgente y de las condiciones que degradan el conflicto debido a la relación con economías de carácter ilegal.

Políticamente tiene un riesgo alto ajustar un modelo como el propuesto por el actual Presidente desconociendo el carácter social y simbólico del conflicto colombiano, al punto de desdibujarlo completamente invirtiendo prioridades y discusiones, sustituyendo la esencia por el cascarón. El modelo de seguridad democrática ha sorteado este riesgo, hecho al que contribuye la personalidad del Presidente y sus airados discursos e intervenciones, no obstante dicho modelo se nutrió del sentimiento generalizado por dar punto final a la confrontación con la guerrilla, lo cual por supuesto era el paso fundamental para recuperar el orden y la seguridad.

Una vez en la Presidencia, el mandatario concentró todos sus esfuerzos en una estrategia diferente, la cual tuvo el mérito indiscutible de haber tenido una lectura del contexto muy acertada debido a las tensiones geopolíticas que Colombia genera en la Comunidad Internacional, entiéndase Estados

Unidos. Dicha estrategia consistió en la internacionalización del conflicto y el fortalecimiento militar como prioridades esenciales de la construcción de un nuevo régimen político.

Así entonces, la política de Seguridad Democrática con el soporte económico del Plan Colombia redujo las posibilidades reales y concretas de redefinir los espacios democráticos al hacer de la Constitución Política Colombiana solamente un instrumento de sometimiento a los alzados en armas dado que la legitimidad reposa en la seguridad que ofrecen las Fuerzas Armadas. Es importante señalar que durante los nueve años de vigencia del Plan Colombia ha significado una suma de 5.500 millones de dólares, destinados a la lucha contra los cultivos ilícitos y contra las FARC, cifra a la que habría que sumar el presupuesto nacional para la guerra que podría ascender a una cifra cercana a más de 1.100 millones de dólares por año (2002 – 2009), lo que equivaldría a unos 8.800 millones de dólares, esto significa que el costo de la ofensiva, el costo de la implementación de la política de seguridad democrática, la operativización de la misma, estaría alrededor de unos 22 billones de pesos.

El problema que se avizora es que la narrativa oficial sobre seguridad y sobre democracia y, en últimas sobre la reconstrucción moral del país, ha logrado capturar simbólicamente dolores, desencantos y frustraciones de muchos colombianos que han ido en incremento con la propia degradación del conflicto armado, a costa de la manera casi imperceptible en que se convierte en una política autoritaria, en términos de voces legitimadas, que pone por encima de las libertades individuales los intereses del Estado, alimentada por el escenario mediático que ha sido tan bien aprovechado por el Presidente. La imagen proyectada a través de sus discursos, la imagen de padre furioso y hombre compasivo ha llenado una atmósfera vacía de confianza y seguridad de tiempo atrás.

La propuesta de Seguridad Democrática ha construido una narrativa paternalista que impide la construcción de la democracia a través del ejercicio de la ciudadanía, una ciudadanía que reclama urgentemente llenarse de ciudadanos, propositivos e imaginativos para interpretar la realidad del país. La reducción leve de indicadores de violencia política que en buena medida está ligada con el proceso *sui generis* de negociación con los grupos de autodefensa, el mejoramiento de los indicadores económicos, han contribuido a la formación de un imaginario en el que se ha desplazado el sentido de la responsabilidad colectiva al sentido de la responsabilidad única en la figura del Presidente quien ha asumido dicho papel.

Bibliografía

- Arfuch, Leonor (2008). *Crítica cultural entre política y poética*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Jelin, Elizabeth (2002). *Los trabajos de la memoria*. España: Siglo Veintiuno.
- Mouffe, Chantal (2007). *En torno a lo político*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Bruner, Jerome (2006). *Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva*. España: Alianza Editorial.
- Arévalo, Bernardo (2002). *Hacia una política de seguridad para la democracia*. Guatemala: Magma Terra Editores.